

Nuevos temas de seguridad en América Latina.

El proceso de desmovilización y “reinserción” de la contra
nicaragüense: algunas claves para el análisis de la violencia rural
en Nicaragua

Salvador Martí Puig

EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y “REINSERCIÓN” DE LA CONTRA NICARAGÜENSE: ALGUNAS CLAVES PARA EL ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA RURAL EN NICARAGUA

- EL INICIO DEL PROCESO: ACUERDOS DE PAPEL
- LA INEXISTENCIA DE POLÍTICAS EFECTIVAS DE REINSERCIÓN
- DESMOVILIZADOS Y VIOLENCIA RURAL: LOS REMANENTES DEL CONFLICTO

Salvador Martí Puig

Universitat Autònoma de Barcelona

El inicio del proceso: acuerdos de papel

Con la firma de los Acuerdos de Sapoá (el 24 de marzo de 1988) y Tela (el 7 de agosto de 1989) “terminó” la guerra que, durante casi nueve años, sostuvieron los sandinistas y la Contra, y se inició otro proceso no menos complejo y problemático, a saber, el proceso de desmovilización de los miembros de ambos ejércitos y su posterior “integración” en la sociedad.

En primer lugar, cabe señalar que el proceso de desmovilización fue largo, agónico y contradictorio. El acuerdo firmado en Tela por los cinco presidentes de la región se tituló “Plan conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación voluntaria en Nicaragua y terceros países de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y de sus familiares; así como de la asistencia para la desmovilización de todas aquellas personas involucradas en acciones armadas en los países de la región, cuando voluntariamente lo soliciten”. En este plan se creó una Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV) –integrada por representantes del Secretario General de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA)– que tenía como objetivo ejecutar, en el plazo de noventa días (desde la fecha de su constitución¹), el retorno a Nicaragua de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y su posterior integración en el proceso político que entonces acontecía y en la sociedad.

La CIAV, en colaboración con los gobiernos centroamericanos y con el apoyo de organismos especializados, se convertiría en la organización responsable de todas aquellas actividades relacionadas con la desmovilización, repatriación y reubicación voluntaria de los *contras*. El procedimiento para llevar a cabo dicha misión se detalló a partir de seis puntos. En éstos se nombraban las tareas de la recepción de armas y pertrechos de guerra por parte de la Comisión; la verificación del desmantelamiento de los campos militares y de refugiados dejados por la Resistencia Nicaragüense en Honduras; la conducción de los repatriados a su lugar de asentamiento definitivo (escogido de común acuerdo entre el Gobierno nicaragüense y la CIAV); la proporción de servicios básicos, primeros auxilios y asistencia técnica; y la garantía de la seguridad personal de sus beneficiarios.

Mientras la cúpula civil de la Resistencia Nicaragüense se integraba en la vida política, los líderes militares optaron, a partir de octubre de 1989, por concentrar la tropa en suelo nicaragüense para desarrollar una intensa campaña a favor de la Unión Nacional Opositora (UNO)

Con todo, a pesar de la sencillez y brevedad de tal documento (el acuerdo de Tela), los acontecimientos siguieron otro rumbo². Ello se debió, por un lado, a la relativa autonomía que disponía en esos momentos la tropa de la Contra respecto a los firmantes del acuerdo expuesto y, por otro, a la complejidad del fenómeno social que subyacía debajo del conflicto bélico. Con todo, a partir de entonces (ya entrado el año 1990) buena parte de la atención política nicaragüense, centroamericana y norteamericana se centró en cuándo y cómo se desmovilizaban los casi 8.000³ –según fuentes oficiales (como se observa en la tabla 1 y 2)– combatientes contras.

Tabla 1. Número de combatientes de la Resistencia Nicaragüense (RN) en Honduras y Costa Rica

| | |
|--------------------|--------------|
| Honduras | 3.850 |
| Costa Rica | 550 |
| Total | 4.400 |

Fuente: Ministerio de Defensa en *Barricada Internacional*, 1990/71.

Tabla 2. Número de combatientes de la Resistencia Nicaragüense (RN) en el interior de Nicaragua, por Regiones Militares (RM)

| | |
|--|--------------|
| RM I (Estelí, Nueva Segovia y Madriz) | 400 |
| RM V (Boaco, Chontales y Nueva Guinea) | 1.400 |
| RM VI (Matagalpa y Jinotega) | 1.000 |
| RM VII (Región Autónoma Atlántico Norte) | 200 |
| RM VIII (Región Autónoma Atlántico Sur) | 100 |
| Total | 3.100 |

Fuente: Ministerio de Defensa en *Barricada Internacional*, 1990/71.

En cuanto a lo primero (la relativa autonomía de la tropa de la Resistencia Nicaragüense respecto a su directorio político), una buena muestra de ello fue la respuesta que recibió la delegación de la CIAV-OEA en Yamales (localidad hondureña donde estaban ubicados la mayoría de campamentos de la Contra) a la aseveración de que “desarmarse era la mejor opción que tenían [los contras]” y que “su existencia ya se había vuelto obsoleta”. Los líderes militares de la Contra respondieron que “esperarían los cambios prometidos [en el sistema político nicaragüense] con las armas en la mano”⁴.

En esas circunstancias, mientras la cúpula civil de la RN se integraba en la vida política nicaragüense, y los sectores más reaccionarios de la administración estadounidense del exilio de Miami y del entorno del ex coronel de la Guardia Nacional (GN), Enrique Bermúdez, calificaban este acontecimiento como “una repetición de Playa Girón en cámara lenta”, los líderes militares de la RN optaron, a partir de octubre de 1989, por concentrar la tropa en suelo nicaragüense para desarrollar –donde llegaran– una intensa campaña a favor de la Unión Nacional Opositora (UNO) y para, fuera cual fuera el desenlace electoral, poder negociar desde una posición de fuerza su desmovilización, –pues su presencia supondría la existencia de un ejército enclavado en el interior del país–.

Así, desde octubre de 1989 hasta febrero de 1990, la Contra desarrolló un constante trabajo proselitista a favor de la coalición de la UNO en las poblaciones en las que se asentaron, tal como expuso el comandante contra *Wilmer* en posteriores declaraciones:⁵

“Le dimos apoyo cívico a la campaña electoral de la UNO, entrenando a los campesinos para que pudiesen marcar correctamente las tres tarjetas. Estábamos en Estelí, la Sirena, Sacaclí, Namaslí, San Rafael del Norte, Pantasma, Ayalí y Nueva Segovia. Yo era jefe de la Segunda Brigada del ejército de la Resistencia. Eran 3.200 guerrilleros dispersos en toda esa zona (...). Conseguimos las tres tarjetas que debía marcar el votante y lanzamos la campaña. Entrenamos a muchos campesinos. Era complicado, pues eran tres tarjetas con 21 partidos políticos, y mucha gente estaba confundida (...). Los contras le hicimos campaña a la UNO y el Ejército al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)...”.

En cuanto la segunda pretensión (la de consolidar su presencia dentro de Nicaragua sin renunciar a su capacidad de fuego), ésta supuso una amenaza latente para la administración sandinista, así como la desautorización de la cúpula de la RN y de quienes firmaron los acuerdos de paz auspiciados por la comunidad diplomática. Pero también supuso un cambio radical en las demandas y pretensiones hasta entonces exteriorizadas por el ejército de la Contra; y así lo expresó el comandante *Pepe* (José Boanerges Matus), uno de los comandantes de campo que entonces, junto a los comandantes *Franklin* (Israel Galeano) y *Rubén* (Óscar Sobalbarro), lideraban la tropa⁶ :

“Desde finales de 1989 teníamos *todita* la tropa en Nicaragua. Habíamos metido el resto de lo que nos quedaba en Honduras, porque si el Frente ganaba las elecciones, en ese momento con esas posiciones que nosotros teníamos, negociaríamos en una posición de fuerza y jugaríamos la última carta (...). Cuando tuvieron lugar las elecciones, nosotros teníamos cercado Estelí, teníamos rodeado Matagalpa, teníamos gente alrededor de La Trinidad y alrededor de Juigalpa. Casi toda la tropa, hasta el último soldado, la teníamos dentro de Nicaragua. Sólo los lisiados quedaron en Honduras (...). Pero también habíamos pensado en qué pasaría si ganaba la UNO. Si ganaba era el final de la Resistencia y... ¿qué pasaría con nosotros? Había gran incertidumbre (...). Nosotros sabíamos que la gente nuestra no tenía capacidad intelectual ni de dirección, nos dábamos cuenta que la mayoría de nuestra gente era casi analfabeta ¿qué podíamos hacer? (...). Entonces Franklin encontró la salida. Dijo: “busquemos la tierra, cada uno de nosotros debe ser un productor y buscar un banco de tierra con paz, varios miles y miles de manzanas que nos permitan consolidarnos como fuerza productiva y que nos permita mantenernos unidos”.

Así, si bien a partir del 9 de septiembre empezaron a regresar *contras* lisiados –con el apoyo de la agencia USAID (US Agency for International Development)– por los canales oficiales pactados en los acuerdos, el resto de la tropa fue ubicándose más allá de las siete “zonas de seguridad” determinadas en los acuerdos de Sapoá. De esta forma, en las últimas conversaciones entre la Contra y el Gobierno nicaragüense –desarrolladas durante las primeras semanas de noviembre de 2001 en Nueva York y

El objetivo de dichos acuerdos era definir las condiciones de “seguridad” de los desalzados de la Contra, su ubicación y, sobre todo, la creación de los “instrumentos” para su integración social y económica, a saber, los llamados “polos de desarrollo”

Washington– el liderazgo de la primera ya no correspondió al ex coronel de la GN Enrique Bermúdez, sino que fue el comandante *Franklin* –en representación del Estado Mayor de los Comandantes de Campo– quien ejerció de máximo representante de la Contra, exponiendo las demandas e inquietudes de la tropa.

Sin embargo, a pesar de los múltiples acuerdos firmados por los presidentes centroamericanos, y por las comisiones de la RN y del Gobierno, la tropa de la RN permaneció íntegra e intacta en el interior de Nicaragua hasta el 23 de marzo de 1990 (cuando se firmó el Acuerdo de Toncotín). De esta forma, la Contra mantuvo su integridad hasta que se conoció el desenlace electoral y después de que se firmara el Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo, donde se garantizaba el traspaso del poder ejecutivo al nuevo Gobierno presidido por Violeta Barrios de Chamorro.

El Acuerdo de Toncotín –firmado por representantes de la RN y del nuevo Gobierno, y bajo el auspicio del cardenal Obando y Bravo– contemplaba: el efectivo y definitivo cese al fuego; el compromiso de que la Contra desarmara sus tropas antes del 20 de abril; y que ésta se concentrara en las “zonas de seguridad” delimitadas previamente y vigiladas por organismos internacionales. Por su parte, el Gobierno entrante se comprometía a amparar a las víctimas del conflicto y asegurar la rehabilitación y readaptación social de los desmovilizados.

Con todo, en los meses siguientes se encadenaron nuevos acuerdos y declaraciones entre ambas partes, firmándose así el “Acuerdo del cese al fuego efectivo y definitivo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense” el 25 de abril; la “Declaración de Managua” el 4 de mayo; y el “Protocolo de Managua sobre el desarme” y el “Acuerdo para el establecimiento de Polos de Desarrollo” el 30 de mayo⁷. El objetivo de dichos acuerdos era definir las condiciones de “seguridad” de los desalzados de la Contra, su ubicación y, sobre todo, la creación de los “instrumentos” para su integración social y económica, a saber, los llamados “polos de desarrollo”.

Los “polos de desarrollo”, previamente localizados por el Gobierno y la RN dentro de una extensión de ocho mil kilómetros cuadrados⁸, se concibieron como la solución a las demandas de tierra expresadas por parte de los combatientes y posteriormente recogidas por los comandantes de campo. En el “Acuerdo para el establecimiento de Polos de Desarrollo” se estableció su ubicación y su definición:

“Entendemos por polos de desarrollo a una unidad de producción definida para beneficio de los miembros de la comunidad y del país que sirva como centro de servicios y de desarrollo de la región adyacente, por medio de proyectos individuales y/o colectivos. Los polos de desarrollo deben contar con las siguientes estructuras básicas: área municipal; escuelas, bodegas, servicios de agua potable, luz eléctrica, hospitales, calles, caminos; áreas de vivienda para los pobladores del polo; parcelas de propiedad privada para cultivos y ganadería de subsistencia; un área comunal y un área de proyectos para beneficio de todos los miembros de la comunidad (...). Los miembros de la RN que se desmovilicen y sus

familiares tendrán derecho a ser beneficiados por los programas que se implementen en los polos de desarrollo delimitados al efecto”.

A partir de entonces los desalojados de la RN empezaron a concentrarse en nueve zonas de seguridad para hacer efectiva su desmovilización. Sin embargo, las cifras de desmovilizados y sus familiares (tal como se observa en la tabla 3) sobrepasó toda previsión⁹ y, con ello, surgirían nuevos interrogantes sobre la capacidad de atender las demandas de tierra y financiamiento de todos los desmovilizados, y si éstos tendrían que compartir los recursos con el resto de afectados por el conflicto bélico, es decir, con los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista (EPS) y del Ministerio del Interior (MINT), los repatriados y los desplazados.

Las cifras de desmovilizados y sus familiares sobrepasó toda previsión y, con ello, surgirían nuevos interrogantes sobre la capacidad de atender las demandas de tierra y financiamiento de todos los desmovilizados

Tabla 3. Zonas de seguridad, su extensión, número de desmovilizados y de familiares

| Zona | Denominación | Extensión | Desmovilizados | % total | Familiares | % total |
|--------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 1 | Amparo | 435 Km ² | 2.894 | 12,91 | 4.751 | 8,03 |
| 2 | Kubali | 585 Km ² | 1.671 | 7,45 | 3.656 | 6,23 |
| 3 | San Andrés | 440 Km ² | 3.019 | 13,47 | 7.631 | 13,0 |
| 4 | La piñuela | 600 Km ² | 3.164 | 14,12 | 8.463 | 14,41 |
| 5 | El Almendro | 550 Km ² | 6.626 | 29,56 | 18.885 | 32,16 |
| 6 | Bilwaskarma | sin datos | 1.785 | 7,96 | 6.233 | 10,61 |
| 7 | Alamikamba | sin datos | 171 | 0,76 | 518 | 0,88 |
| 8 | Yolaina* | sin datos | 1.745 | 7,79 | 5.394 | 9,19 |
| 9 | Los Cedros** | sin datos | 1.338 | 5,97 | 3.226 | 5,49 |
| Total | | 2.520 Km² | 22.413 | 100 | 58.721 | 100 |

*El 18 de junio de 1990 se creó la Zona de Seguridad n° 8 con el fin de desmovilizar a los miembros de la RN provenientes de Costa Rica.

**El 25 de junio de 1990 se creó la Zona de Seguridad n° 9 en Los Cedros, cerca de San José de Bocay, para desmovilizar a aquellos miembros que habían perdido el contacto con sus comandantes y que se encontraban dispersos en la montaña.

Fuente: CIAV-OEA, 1991.

La inexistencia de políticas efectivas de reinserción

Una vez diseñado el “plan”, sin embargo, cabría preguntarse por la capacidad y la “voluntad política” del nuevo Gobierno en cumplir los acuerdos suscritos y por el flujo (cada vez menor) de la ayuda económica –prometida por el gobierno de los EEUU antes de las elecciones de febrero– para costearlos. Y más cuando en las zonas donde el Gobierno ubicó los polos ya residían y trabajaban campesinos, precaristas, cooperativas y algunas (por entonces) empresas estatales.

Así, en un documento publicado por la Asociación Cívica de la Resistencia Nicaragüense (ACRN), se mencionaba que hasta 1991 sólo se habían recibido un total de 150.000 manzanas de tierra en unas 75 fincas ubicadas en varios municipios de la región V y VI, llegando sólo a atender apenas a un 20% de la demanda total de las tierras¹⁰. De esta forma, se confirmó la temida tesis de que los polos de desarrollo sólo existían en el papel, empezándose a dudar del cumplimiento de las promesas realizadas por el Gobierno recién electo.

Empezó a manifestarse un complejo y conflictivo proceso del cual emergerían divergencias entre los desmovilizados de la RN y el Gobierno; entre los primeros y los desmovilizados del EPS; y entre los cooperativistas y los desmovilizados de ambos ejércitos

A consecuencia de dicho fenómeno empezó a manifestarse un complejo y conflictivo proceso del cual emergerían divergencias entre los desmovilizados de la RN y el Gobierno; entre los primeros y los desmovilizados del EPS; y entre los cooperativistas y los desmovilizados de ambos ejércitos. Todo ello supondría la apertura de un nuevo capítulo de convulsión social en el campo.

Es en este contexto donde tienen que interpretarse ciertas declaraciones de miembros de la Contra donde se denunciaba la actitud del nuevo Gobierno:

“La Contra siempre fue una fuerza de presión de los EEUU contra los sandinistas, lo cual nos impidió convertirnos en un movimiento de liberación (...). El apoyo de Washington terminó hace bastante tiempo y siempre estuvo condicionado... Ahora ya no interesamos y nos han abandonado, tanto los EEUU como el Gobierno. No esperamos nada de ellos”¹¹. (...). El nuevo Gobierno sólo representa a la oligarquía”¹².

“Doña Violeta no ha cumplido con los acuerdos que firmó. No tenemos seguridad, no han desarmado a los sandinistas, no nos han entregado las viviendas que nos prometieron (...). El Gobierno nos está *dando vuelta* con mentiras y con políticas, porque nos desarmó como a cualquier *pendejo*”¹³.

“Nos fiamos de los acuerdos que firmamos con el Gobierno, donde nos prometieron tierras, viviendas, medicinas, hospitales, centros de salud, escuelas, luz eléctrica y agua potable. Dijeron que trabajaríamos en las ciudadelas de los polos de desarrollo. Según los análisis que nosotros hacíamos, a estas alturas todo el mundo ya debería estar ubicado en su pedazo de tierra, haciendo su propia vida y avanzando en cuanto a la producción con préstamos sociales y todo eso. Pero no es así”¹⁴.

Tempranamente se observó el incumplimiento de los acuerdos firmados. De esta manera, si bien la administración Chamorro se comprometió a la inmediata construcción de cuatro polos de desarrollo (El Almendro, Río Blanco, Yolaina y la zona del Río Coco en la Costa Atlántica) pronto los mismos responsables del Instituto de Reforma Agraria declararon que “la realidad nos hizo comprender que estábamos equivocados, y que debíamos acabar con ese espejismo, porque para que se llevaran a la práctica necesitábamos bancos compactos de tierra de unas cien mil manzanas de extensión y eso era imposible. El Gobierno tuvo que enfrentar la realidad, y consideró que lo único posible era formar micro-polos, en pequeñas extensiones de tierra, distribuidas a lo largo de todo el país”¹⁵.

Pero no sólo fue eso, sino que cuando los ex combatientes de la RN llegaron a dichos polos vieron que todas aquellas promesas que se hicieron en su día (la construcción de escuelas, centros de salud, puntos de agua...) nunca llegaban; así, los abandonaron en busca de su familia, de sus amigos, de su lugar natal o, simplemente, regresaron a la montaña a buscar un *pedacito* de tierra para trabajar o a ofrecerse como jornaleros en fincas ajenas. Así, tal como predijo –esta vez acertadamente– el sociólogo Orlando Núñez a mediados de 1990¹⁶:

“Al término de este ciclo agrícola tendremos un estallido en el campo más grande del que hemos tenido en toda la historia de Nicaragua. Los campesinos de la Contra no están vacunados contra el desempleo, contra los bajos salarios, contra la desertificación de las tierras, contra la falta de acceso a las tierras, contra las políticas de crédito y las tasas de interés, contra la diferencia entre los precios de la ciudad y del campo... o sea, frente a todos los problemas que padece el campesinado nicaragüense”.

Ciertamente, el descontento en el campo estalló poco después de que los “potenciales usuarios” de los polos de desarrollo vieron que éstos fueron, simplemente, una quimera. El descontento se canalizó a través de dos expresiones. Por un lado, el rearme de miembros que antes pertenecieron a la RN –surgiendo la *Recontra*– y, por el otro, (en una dinámica de causa-efecto) el rearme de desmovilizados del EPS –los llamados *recompas*–. Y por otro, la gestación, por parte de los diversos colectivos campesinos que anteriormente se enfrentaron en la guerra, de una consciencia común de que compartían los mismos intereses y agravios.

En cuanto a la situación de los ex contras, a mediados de julio de 1990 se realizó (conjuntamente por el Gobierno, la RN, el EPS y delegados de diversos organismos internacionales) una evaluación de los acuerdos de desmovilización donde se concluyó que sólo se cumplió y verificó la retirada de las tropas de la RN de sus antiguos cuarteles; pero también que aún no se había terminado la tarea de la recolección de armamento –pues la comisión nacional de desarme no funcionó satisfactoriamente–; que la seguridad de los ex miembros de la RN no pudo garantizarse plenamente; que la función de reinserción social de los polos de desarrollo no fue efectiva; y que la ayuda estatal prometida nunca llegó. Así, si bien se certificó que existían 10.493 beneficiarios de parcelas de tierra (con una superficie de 370.912 manzanas), también se apuntó que el 53% de los desmovilizados aún no tenían acceso a ellas (Cuadra y Saldomando, 1994:11-13). Dicha evaluación mostró que el “proceso de reinserción” no tenía una base sólida y que el intento de pacificar el campo por la vía del desarme, de la cooptación de los cuadros de la Contra, y de la adjudicación de tierras sin una previa estrategia global con el resto de políticas implementadas por el nuevo Gobierno, estaba destinada al fracaso.

En efecto, el impacto negativo de la política económica (que supuso una fuerte recesión, un incremento del desempleo, una disminución del crédito, y una reducción del circulante) dejó los acuerdos que pretendían integrar a los combatientes de ambos bandos sin una base donde sustentarse. Sobre ello, estudios posteriores concluyeron que la envergadura del problema derivado de la guerra nunca fue percibido en su totalidad; la dimensión masiva del fenómeno quedó de manifiesto al ver que 600.000 personas (el 15% de la población) estaban directamente afectadas por el conflicto bélico y necesitaban ayuda de emergencia. Entre ellos cabía considerar, por un lado, los 71.750 refugiados¹⁷ provenientes de Costa Rica y Honduras que optaron por la repatriación entre 1986 y 1993¹⁸; los 22.413 desmovilizados de la RN¹⁹ y sus 58.721 familiares; los 72.000 desmovilizados del EPS (de los 96.000 miembros existentes) y 5.100 del antiguo Ministerio del Interior²⁰ (MINT); y los 354.000 desplazados internos a causa de la guerra, mayoritariamente ubicados en las regiones del interior del país²¹.

El descontento se canalizó a través de dos expresiones. Por un lado, el rearme de miembros que antes pertenecieron a la RN –surgiendo la *Recontra*– y, por el otro, (en una dinámica de causa-efecto) el rearme de desmovilizados del EPS –los llamados *recompas*–

El repliegue territorial del Estado impidió que existiera una institucionalidad adecuada acorde con la envergadura del problema, provocando –en la mayoría de casos– un vacío de poder en las zonas que habían sido el escenario de la guerra

Desmovilizados y violencia rural: los remanentes del conflicto

Otro ejercicio que revelaba la amplitud del problema era la comparación de la cifra de desmovilizados con la de los empleos formales existentes en Nicaragua: los desmovilizados de ambos bandos (tal como se observa en la tabla 4) equivalían en 1991 a los tres sectores del empleo formal del país.

Tabla 4. Total de desmovilizados y número de empleados formales en los tres sectores de la economía nicaragüense, 1991

| Desmovilizados | Número | Sectores económicos | Número |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| EPS | 72.000 | Agropecuario | 28.000 |
| RN | 22.413 | Industrial | 33.400 |
| MINT | 5.100 | Comercial | 21.500 |
| Total | 99.513 | Total | 82.900 |

Fuente: Cuadra y Saldomando, 1994:21.

Por otro lado, el repliegue territorial del Estado impidió que existiera una institucionalidad adecuada acorde con la envergadura del problema, provocando –en la mayoría de casos– un vacío de poder en las zonas que habían sido el escenario de la guerra. En este sentido, es gráfica la expresión que repetidamente me decían los colegas cada vez que anunciaba mi estancia en el *país campesino*, a saber: “*vigilá*, porque en este *paísito* el Estado sólo llega hasta el cruce de Sébaco... Más allá es tierra de nadie”. Y efectivamente, tal como se observó, al poco tiempo de que el Gobierno Chamorro tomara posesión, éste se olvidó de la problemática del campo. En esa dirección, cuando en una entrevista preguntaron al Cardenal Obando y Bravo si pensaba que Violeta Chamorro se había olvidado de los desmovilizados de la Contra, éste respondió: “olvidarse no creo... pero preocuparse tampoco”²².

Fruto de todo ello, en octubre de 1990²³, 200 ex contras tomaron el poblado de Waslala, iniciando lo que poco más tarde se llamaría la Recontra. El deterioro de la situación continuó y a partir de entonces empezó una escalada de violencia en el campo. Los días 16 y 17 de noviembre del mismo año otro grupo de recontras tomó el puesto policial de la población de Jalapa. Así, a mediados de 1990 (tal como se observa en la tabla 5) los conflictos armados se sucedieron, creando una espiral de violencia.

Tabla 5. Tipo y número de conflictos sucedidos desde 1990-1993

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|-----------------------|------|--------|------|------|
| Toma de tierras | 288 | 217 | 162 | - |
| Toma de poblados | 7 | 8 | - | 3 |
| Toma de instituciones | * | 140 | - | - |
| Alteración del orden | * | 216 | 240 | 28 |
| Acciones armadas | * | 238 | 378 | 97 |
| Participantes | * | 22.835 | 500 | 960 |
| Víctimas | * | 281 | 422 | 320 |

*Para 1990 no hay información precisa, aunque sí existió un abultado número de conflictos, participantes y víctimas.

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Gobernación, en Cuadra y Saldomando, 1994:14-15.

La situación expuesta fue, en gran medida, consecuencia de la falta de salidas al problema de la “reinserción” ya que ésta tuvo que darse en un contexto extremadamente adverso, tanto en lo político como en lo social. Ello motivó que los cuadros intermedios de la RN –atenazados por sus bases– se alzaran en armas contra el Gobierno con el fin de presionarlo en pos del cumplimiento de las promesas acordadas. La primera formación *recontra* con una organización formalizada fue el llamado Frente Democrático de Salvación Nacional (FDSN), representado por un “Estado Mayor” de once personas que, durante la guerra contrarrevolucionaria, habían ocupado cuadros intermedios. Posteriormente se crearían otros grupos, como el Frente Norte 3-80 encabezado por José Ángel Talavera –*el Chacal*–, dándose así un proceso de atomización de la actividad armada que, cada vez más, recordaba al fenómeno del bandidaje más que al “político-militar”.

Pero, como era de esperar, el rearme de ex contras causó temor a los miembros de las cooperativas –mayoritariamente de adscripción sandinista– y a los desmovilizados del EPS y del MINT en las regiones I, V y VI. Así, éstos –como mecanismo de protección²⁴– retomaron las armas creando el colectivo que se conocería como los *recompas*. En un primer momento los *recompas* se organizaron en torno al llamado Movimiento de Autodefensa Nacional (MADN); posteriormente tomaría notable relevancia la organización llamada Frente Obrero y Campesino (FROC) dirigido por el ex mayor del EPS Víctor Manuel Gallego –apodado *Pedrito el Hondureño*– y que actuaría por la zona norteña de Estelí.

El resultado de esta dinámica fue que, a mediados de 1992, el Ejército –en su balance semestral– estimó que el número de rearmados era, entre *recontras* y *recompas*, de 21.905, es decir, casi la misma cantidad de miembros que había iniciado la desmovilización de la RN en 1990. Los nuevos contingentes de rearmados llegaron a disponer de 13.980 fusiles automáticos y otro tipo de armamento como ametralladoras, minas, misiles antiaéreos y antiblindados. Todo este material había estado almacenado en zulos y cuevas (*buzones*, tal como se les llama en Nicaragua) antes del “desarme oficial” realizado por la CIAV y ONUCA. Tal como comentaron los rearmados con quienes hablé en la comarca de La Patriota (Matiguás), los ex combatientes sólo dieron a las organizaciones competentes el material en desuso, y lo rubricaron de la siguiente forma: “con lo del desarme dimos los fusiles *descachimbados*... Hicimos sólo *la mueca*”. De esta forma, una vez más, en muchos de los poblados que anteriormente fueron escenario del conflicto bélico (como Matiguás, Pantasma, Waslala, Wasaka, San Juan de Limay, Wiwilí, El Cuá, Yalí, El Ayote, Quilalí, El Júcaro, La Concordia, La Trinidad, Yolaina, Río Blanco...) se volvió a presenciar una espiral de violencia.

El panorama que se dibujó entonces fue el de un círculo vicioso de incomprensión; de acusaciones mutuas de incumplimiento entre el Gobierno y los colectivos rearmados; de ajustes de cuentas entre desmovilizados; y de negociaciones interminables. De dichas negociaciones surgieron nuevos “rearmes” como estrategia de los grupos rearmados para presionar y obtener beneficios²⁵; y nuevos “desarmes” y acuerdos *ad hoc* como estrategia coyuntural del Estado para acallar la agitación en el campo²⁶.

A mediados de 1992, el Ejército –en su balance semestral– estimó que el número de rearmados era, entre *recontras* y *recompas*, de 21.905, es decir, casi la misma cantidad de miembros que había iniciado la desmovilización de la RN en 1990

En el campo se empezó a observar la gestación del fenómeno de la violencia anómica. Nacieron bandas armadas compuestas aleatoriamente por ex contras y ex sandinistas, bandas a las que el ingenio popular terminó apodándolas como *los revueltos*

De esta forma se empezó en el campo a observar la gestación –y posterior expansión– del fenómeno de la violencia anómica, donde los conflictos que anteriormente se basaron en un discurso y una simbología política fueron diluyéndose en un magma de acciones que tenían poco que ver con posicionamientos político-ideológicos. Así, empezaron a quebrarse los actores político-militares que antes se habían caracterizado por su solidez, y se observó la aparición de alianzas pasajeras en las que los colectivos que anteriormente se habían enfrentado se unían para luchar contra la institucionalidad y para demandar intereses comunes y cotidianos que daban poco margen a la ideología o a la retórica²⁷. De esta forma nacieron bandas armadas compuestas aleatoriamente por ex contras y ex sandinistas, bandas a las que el ingenio popular terminó apodándolas como *los revueltos*.

Desde entonces, la actividad de los “nuevos” colectivos armados se caracterizó por la adopción de prácticas y estilos cercanos al bandolerismo, donde los autores materiales de los hechos estaban más preocupados en sobrevivir y saldar diferencias personales que en *luchar contra el comunismo* o en *crear el hombre nuevo*. De la misma manera, la creación de “impuestos de guerra”, bajo la forma de extorsión de fondos, robos de ganado o de café, ya no se realizaba en aras de financiar nuevas guerras, sino que se sustentaba en objetivos más prosaicos como, por ejemplo, permitir el día a día de los guerrilleros transformados cada vez más en desesperados, inadaptados y desarraigados. En ese sentido, durante la década de los noventa se fue observando que los integrantes de las bandas a las que hacemos mención eran, mayoritariamente, campesinos empobrecidos y adolescentes que no tuvieron ningún protagonismo especial durante la guerra contrarrevolucionaria. Ambos colectivos, procedentes de áreas rurales y sin perspectivas de futuro, dan fe de la descomposición social en que se sumergieron diversas zonas del interior del país. Dicha situación, que difícilmente puede solucionarse por la vía policial, es la que han denunciado repetidamente diversos colectivos, organismos internacionales y miembros de la Iglesia católica (entre quienes destacan los polémicos obispos de dichas regiones).

Fruto de lo expuesto fue la toma de fincas y cooperativas, así como secuestros y asesinatos de campesinos y productores. Precisamente por ello el área descrita se calificó desde inicios de la década de los noventa como la *frontera del conflicto*. Zona donde, según un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1991, más del 50% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema y que, durante ese lustro, el saldo de la actividad armada fue la muerte violenta de una persona cada dos días²⁸, así como se hacía patente la subsiguiente inseguridad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad social o económica.

A consecuencia de lo expuesto, toda lealtad o referencia hacia una autoridad institucional en el área desapareció, creándose un *vacuum* de poder del que surgieron, muchas veces, siniestros señores de la guerra que mantenían, en determinadas comarcas, *su dominio del terror*²⁹. Así, se hundió también un sistema de regulaciones y de controles impuestos por el EPS y la RN hasta finales de la década de los ochenta; y apareció un tipo de violencia donde la frontera de lo social, lo político y lo económico devino sumamente borrosa (Bataillón, 1993:32).

Por otro lado, sin embargo, también surgieron diversas expresiones que dieron lugar a cierto optimismo. Entre éstas destacaron coincidencias creativas entre los campesinos que habían ejercido de *correos* o de colaboradores de la RN, los productores vinculados a la UNAG y los cooperativistas de adscripción sandinista. En esta dirección, en una investigación realizada por el Centro de Investigación y Promoción para el Desarrollo Rural y Social (CIPRES)³⁰ se exponía (Núñez et. al, 1991:564):

“En las regiones I y VI se han realizado encuentros entre desmovilizados de la Resistencia y cooperativistas donde se han manifestado actitudes maduras, sinceras, abiertas y de reconciliación (...). Ambos colectivos tienen conciencia de la problemática que están viviendo (...). No han habido reclamaciones por ninguna de las partes en cuanto a lo sucedido durante la guerra, más bien han ido cediendo espacios al interior de las cooperativas para minimizar el conflicto de la tierra”.

De ello, en pequeñas poblaciones rurales otrora golpeadas por la guerra, estos colectivos –anteriormente enfrentados– empezaron a *reconstruir* sus comunidades a partir de la percepción de que entre ellos existía mucho más en común que con quienes anteriormente los enfrentaron y comandaron desde Managua o Miami. Sobre esta base, y a partir de cuestiones tan cotidianas como la reconstrucción de los círculos de compra-venta de bienes de consumo básico entre los pobladores, la organización de *liguillas* comarcales de partidos de béisbol, o la apertura de locales donde se concentran los vecinos de la comunidad para celebrar las festividades, se inició la esperanza de recomponer el país campesino. Y es precisamente a partir de ello que podemos comprender declaraciones y comentarios como los siguientes, donde se enfatizan las coincidencias que existen entre estos colectivos y las divergencias con sus ex jefes:

“Nos inculcaron que ellos eran comunistas y a ellos les enseñaron que nosotros éramos contrarrevolucionarios, y ninguna de las dos cosas era verdad”³¹.

“*Mirá* hombre, a los ricos no les importa si los afectados son ustedes o nosotros, porque todos nosotros somos *palmados*. Aquí la cosa está entre los ricos y nosotros, los *chapiollos*. Entonces tratemos de ver como nos defendemos (...) y establezcamos una coordinación para que nos ayudemos si alguno de nosotros lo necesita”³².

“Hay que ser honrados (...) no siempre se entendió que la contrarrevolución había creado su base social en el campo (...) la gente de la RN con que hablé *ahorita* son campesinos, incluso encontré productores que fueron amigos míos en los años sesenta (...). Ahora no tienen dinero, ropa, zapatos... y sólo *hacen un tiempo* de comida... los enclaves están verdaderamente en una situación dramática... En medio de todo esto, muchas veces han sido los mismos cooperativistas, tantas veces víctimas de la acción guerrillera, los que han estado compartiendo con ellos lo poco que tienen”³³.

“Diez años de guerra fueron más que suficiente. Ahora tenemos que entendernos y empezar a producir (...). Hay que destacar algo

En pequeñas poblaciones rurales otrora golpeadas por la guerra, estos colectivos –anteriormente enfrentados– empezaron a *reconstruir* sus comunidades a partir de la percepción de que entre ellos existía mucho más en común. Sobre esta base, se inició la esperanza de recomponer el país campesino

importante: por primera vez en la historia de Nicaragua, los sectores antes confrontados se quedan y tienen derecho a vivir en el país. Tenemos que entendernos”³⁴.

“Antes no me atrevía a cruzar el río. Más allá del Cerro de Cantagallo le podían caer los contras. Nunca iba a la comunidad vecina... Nos mirábamos mal... Ahora es diferente, los recelos entre nosotros van desapareciendo... Nos necesitamos para sacar a delante nuestro *tuquito* de tierra”³⁵.

De esta forma, se observaron dos tendencias contradictorias. Por un lado, la creación de un nuevo conflicto que tomó el relevo a la guerra contrarrevolucionaria de los ochenta. Se trataba de un conflicto bastardo, sin laureles, anómico y confuso, que tenía sus bases en la supervivencia, la descomposición social, y la falta de perspectivas y esperanzas de quienes –durante toda una década– fueron movilizados y armados por coroneles, generales y políticos que, desde 1987 habían iniciado un proceso negociador y que a inicios de los noventa ya compartían un hemicycle, una institucionalidad y -muchas veces- unos intereses. Por el otro, el surgimiento de dinámicas que han ido vinculando de forma pacífica y creativa a los miembros de los colectivos antes enfrentados. De dichas dinámicas ha empezado a surgir un nuevo fenómeno que podríamos calificar como (en oposición a la rearticulación de pactos intraelitarios que se desarrollaron a partir del Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo) la reconciliación desde abajo.

Referencias bibliográficas

BATAILLÓN, G. “La violencia en Nicaragua y El Salvador. 1991-1992.” *Polémica*. No. 2:19 (1993).

–*Violence et politique en Amérique Centrale. Essai sur la mise en place de la guerre civile nicaraguayenne et des affrontements armés au Guatemala et au Salvador*. París: Tesis Doctoral, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1996.

BENDAÑA, C. *La tragedia campesina*. Managua: CEI-EARIES, 1991.

BUTLER, J. *Nicaragua’s Lessons in the for R’s: Reconciliations, Reconstruction, Reinsertation and Rehabilitation*. XIX LASA Congress: Mimeo, 1995.

BUTLER, J. et al. *Conflictos difíciles, soluciones parciales. La búsqueda del consenso en Nicaragua, 1990-1995*. Cambridge: Iniciativas Hemisféricas, 1995.

ClAV. *Informe de la desmovilización durante 1990*. Managua: Mimeo, 1991.

– *Memoria de trabajo. Comisión Tripartita ClAV-Gobierno de Nicaragua-Comisión de Verificación Cardenal Obando y Bravo*. Managua: Mimeo, 1993.

– *La Frontera del Conflicto*. Managua: Mimeo, 1995.

– *La desmovilización y reinserción de la Resistencia Nicaragüense*. Washington: OEA, 1998.

CUADRA, E. y SALDOMANDO, A. *Los problemas de la pacificación en Nicaragua. Recomposición de grupos armados y conflictos sociales*. Managua: CRIES, 1994.

DODSON & O'SHAUGHNESSY *Fundational Pacts, Political Transition and Democracy Consolidation in El Salvador and Nicaragua*. LASA XIX Congress: Mimeo, 1995.

DUNKERLEY, J. *Power in the Isthmus*. Londres: Verso, 1988.

– *The Pacification of Central America*. Londres: ILAS, 1993.

MARTÍ, S. *Nicaragua 1977-1996: La Revolución Enredada. Un análisis de la realidad política desde la insurrección hasta las inciertas elecciones de 1996*. Madrid: Catarata-Cooperacció, 1997.

– "Recompas y Recontras. Un análisis de la violencia política en la Nicaragua posrevolucionaria". En: *Nueva Sociedad*. Nº 166 (1998), p. 42-60, Caracas.

NÚÑEZ, O. et al. *La guerra en Nicaragua*. Managua: CIPRES-NORAD, 1991.

PNUD-CARTER CENTRE *Nicaraguan Property Disputes*. Atlanta: Latin American and Caribbean Program, 1995.

VICKERS, G.R. & SPENCE, J. "Nicaragua: Two Years after the Fall." *World Policy Journal* No 3 (1992).

SPENCER, J. & VICKERS, G. *Patchwork Democracy. Nicaraguan Politics Ten Years After the Fall*. Cambridge: Hemisphere Initiatives, 2000 .

ZALAQUETT, M. *Julián, tu fantasma*. Managua: Vanguardia, 1992 .

Publicaciones periódicas

Amanecer, Barricada, Barricada Internacional, Crítica, El Semanario, Envío, La Prensa, New York Times, Pensamiento Propio

Notas

- 1 La CIAV-OEA se constituyó 30 días después de suscribirse el acuerdo de Tela.
- 2 Para ver un análisis del proceso de pacificación en el ámbito regional centroamericano ver: (Dunkerley,1993; Dodson & O’Shaughnessy,1995).
- 3 Posteriormente observaremos como los cálculos del Ministerio de Defensa y de diversos organismos internacionales sobre la composición de la tropa de la RN no eran demasiado acertados, ya que, en realidad los *contras* eran más del doble de la cifra expuesta.
- 4 Extraído del *New York Times*, 15-10-1989.
- 5 Extraído de una entrevista realizada a Max Martínez Rodríguez (*Wilmer*) y editada en (Bendaña,1991:95-115).
- 6 Extraído de una entrevista realizada a José Boanerges Matus (Pepe) y editada en (Bendaña,1991:245-246). En el mismo sentido, al realizar trabajo de campo en las comarcas de Matiguás, Copalar, Palacagüina y Boaco, los desmovilizados de la Contra enfatizaron que su principal demanda fue la tierra y la obtención de insumos para trabajarla.
- 7 Para consultar dichos acuerdos de forma íntegra véase la revista *Amanecer*,1990/67.
- 8 El área geográfica donde se crearían los “polos de desarrollo” era la comprendida entre los siguientes puntos: San Ubaldo, Acoyapa, Santo Tomás, Villa Sandino, Muhan, La Gateada, Muelle de los Bueyes, Ciudad Rama, Río Rama, Río Kukra, Miramar, Monkey Point, Punta Gorda, Barra de San Juan, Río San Juan, Mojón número 12, 13, 14, San Carlos, San Miguelito, y Morrito, a excepción de la reserva forestal del Sur-Este y del proyecto SI-A-PAZ. Además de dicha zona, en la región norte se estableció la posibilidad de crear polos en la zona comprendida entre Río Blanco, San Pedro del Norte, Siuna y Waslala.
- 9 Sobre ello coincidían los diversos miembros de la CIAV con quienes conversé. En la misma dirección también apuntan múltiples testimonios de ex combatientes como el de Pedro Turín Blandón –recogido en (Bendaña,1991:151)– cuando expone la sorpresa de los responsables de la desmovilización al ver el número de gente concentrada en las zonas acordadas: “Sabíamos la sorpresa que se llevaría el Frente porque nunca pensó que la guerrilla fuese tan grande como llegó a ser... Aun la CIAV y la ONUCA, cuando nos desmovilizamos nosotros, se quedaron asustados por la cantidad de gente. Ellos pensaron que el trabajo lo iban a hacer con cuatro personas. Cuando ocurrió la desmovilización de La Pedrera, los de la CIAV colgaron sus hamacas en unos lugares y cuando se llenó no había espacio para tanta gente y ellos tuvieron que escoger otro lugar para dormir. Estaban asustados de la cantidad de gente que estaba saliendo de allí... ¡no se la imaginaron nunca!”.
- 10 Extraído del documento elaborado por la ACNUR llamado *Balance del proceso de reinserción*, 1990.
- 11 Declaración de *Franklin* en *Barricada Internacional*,1990/318.
- 12 Como la anterior, pertenece a unas declaraciones de *Franklin* en *Barricada Internacional*,1990/318.
- 13 Extraído de un entrevista al comandante contra *Wilmer* en (Bendaña,1991:99).
- 14 Extraído de un entrevista al ex combatiente contra Francisco García Rivera, *El Cuervo*, en (Bendaña,1991:195).
- 15 Declaraciones realizadas por Boanerges Matus (Pepe), ex comandante *contra* y, posteriormente vice ministro del Instituto de Reforma Agraria (INRA) reproducidas en *Pensamiento Propio*,1991/83.
- 16 Extraído de una entrevista aparecida en *Crítica*,1990/2.
- 17 La mayoría de ellos habían estado viviendo en campos de refugiados auspiciados por ACNUR. Los refugiados eran étnicamente heterogéneos, la mayoría de ellos campesinos o trabajadores del campo y con poca o nula educación formal; sólo 47% eran mujeres, aunque el 30% de las cabezas de familia eran mujeres solas. La mayoría de ellos volvía sin ninguna posesión. ACNUR les facilitó el transporte hasta sus lugares de origen, en Nicaragua; un importe en córdobas equivalente a unos 50 dólares, ropa, alimentos básicos para seis meses, y materiales para la construcción de viviendas. Con todo, entre 15.000 y 20.000 refugiados regresaron “por libre” (Butler,1995).
- 18 En cuanto a la problemática de los refugiados en Centroamérica, ya en 1989 se creó la Conferencia Internacional de Refugiados en Centroamérica (CIREFCA) –auspiciada por ACNUR y en donde participaban más de 200 agencias bilaterales y ONG– con el fin de vincular la solución del

problema de los refugiados con la implementación de políticas de desarrollo integral en la región. Para más información véase: (Butler et. al,1995:41-43).

- 19 El perfil de los desmovilizados de la Contra era similar al de los refugiados: el 83% eran campesinos y sólo el 25% tenía alguna forma de propiedad, el 90% era analfabeto o semi-analfabeto y 2.000 de ellos estaban lisiados o discapacitados. La mayoría se había integrado en la RN de adolescente y no tenía ninguna experiencia como trabajador agrícola. La desmovilización y el desarme fue implementada –tal como hemos visto al inicio del capítulo– por la CIAV y la Comisión de Verificación Miguel Obando y Bravo (CIAV,1991).
- 20 La mayoría de ellos eran jóvenes que hacían el servicio militar y, a diferencia de los colectivos ya citados, eran de procedencia urbana y tenían un mayor nivel educativo. Un sector, sin embargo, pertenecía a los dos cuerpos desde inicios de la Revolución y, algunos, desde la misma insurrección. Entre 1991 y 1993, 25.500 miembros “profesionales” del EPS fueron desmovilizados y su indemnización, producto de diversas negociaciones, varió según sus rangos. La mayoría obtuvieron una mínima pensión, lotes urbanos, y/o beneficios materiales (coches, camiones...) a partir de los cuales podrían crear “microempresas”. Una pequeña minoría, con alto rango y buenas conexiones con la cúpula militar, sí obtuvieron notables beneficios que podían ir desde fincas a propiedades inmobiliarias. Con todo, es importante observar como en menos de dos años el EPS redujo su personal de casi 90.000 a 28.000 miembros. Posteriormente, en los años siguientes, seguiría reduciéndose el tamaño del ejército.
- 21 De entre los desplazados, un 80%-95% vivían en asentamientos rurales creados por el Estado a partir del recrudecimiento de la guerra. De entre ellos el 70%-95% poseía vivienda, y tenía un nivel de desempleo inferior a los desmovilizados y repatriados, pero aún el 24%-33% no poseía ninguna parcela de tierra. Uno de los mayores problemas de este colectivo fue que al volver a sus lugares de origen sus antiguas parcelas estaban ocupadas por otra gente (FONG,1991).
- 22 Extraído de *El Semanario*,1991/23.
- 23 Cabe señalar que ya el 30 de julio de 1990, 70 delegados de la RN se reunieron en Managua para plantear sus problemas de reinserción sin la obtención resultados concretos. Posteriormente, muchos de ellos regresarían a las montañas.
- 24 Ver, en esta dirección, el artículo expuesto en *Amanecer*, 1992/76, donde se ilustra la frágil y dolorosa situación en que se encontraron, desde inicios de 1990, las aldeas, los asentamiento y la cooperativas campesinas ante los ataques –mayoritariamente– de los *recontras*. Sobre ello existen muchos testimonios. Un ejemplo me lo dio el presidente de una antigua cooperativa de una comarca de Condega que fue atacada por la *recontra* en mayo de 1990, cuando los miembros de la cooperativa habían sido ya desarmados. Luego, dirigiéndose a mi añadió –“fue *arrecho*, cuando nos sacaron el fusil quedamos como desnudos”.
- 25 Ejemplo de ello fue el acto de desmovilización conjunta de *recompas* y *recontras* realizado en el departamento de Jinotega en febrero de 1992. En dicho acto, después de largas negociaciones, se estipuló el pago de 200 dólares por fusil, y 2.000 dólares y 4.000 dólares a los jefes de grupo y destacamento, respectivamente (*Barricada Internacional*,1992,347). De 1990 a 1993, el Gobierno nicaragüense desembolsó 1,3 millones de dólares en la compra de armas a los desalzados (Cuadra y Saldomando,1994:34). Efectivamente, esta actividad se convirtió en un pingüe negocio en el que el mercado negro de armas también tuvo su presencia.
- 26 Ver sobre ello los reportajes que dedican *Barricada Internacional*, 1991/338/343/340/; 1992/346/347; donde tratan la problemática de los *rearmados*, las re-negociaciones y el mercado negro de armamento titulados “*recontras*: hambre y manipulación”; “de nuevo a las armas”; “remedio de control sobre los *recontras*”; “otra vez el desarme”; y “comienza el negocio de las armas”. En cuanto a los acuerdos realizados entre los rearmados y el Gobierno y el monto de dinero desembolsado por la administración véase: (Cuadra y Saldomando,1994:35).
- 27 En esa dirección, por ejemplo, ex miembros del EPS mantuvieron relaciones con ex *contras* para realizar acciones conjuntas con el objetivo de presionar al Gobierno. Por otro lado, ex *contras* participaron en la ocupación de propiedades del entonces presidente del COSEP, Ramiro Gurdían, quien anteriormente (en la década de los ochenta) había sido un furibundo anti-sandinista y valedor de la “causa *contra*”.

- 28** Un recuento de las muertes violentas en esa zona –realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)– entre 1990 y 1994 sobrepasaba las 1.500. De ellas, 542 eran ex miembros de la RN y *recontras*, 350 campesinos de adscripción sandinista, 177 miembros del FSLN y 153 miembros de las Fuerzas Armadas. Las principales regiones afectadas fueron la I, con 264 muertes, la V con 213, la VI con 874 y la Costa Atlántica, con 121. Los períodos más intensos fueron de septiembre de 1991 a diciembre de 1992 y de febrero a noviembre de 1993. Por otro lado, según informaciones de la CIAV y la Comisión de Verificación Cardenal Obando y Bravo, no todo fueron muertes con móvil político, también había riñas, delincuencia común, así como el efecto del *guaro*. En la última dirección, en una asamblea realizada por los pobladores de Bocana de Paiwas a la que asistí, los vecinos expusieron que bajo el manto de “lo político” también se realizaban “ajustes de cuentas”.
- 29** En dichas áreas la única presencia del Estado fueron los enclaves en que se mantuvo el Ejército Nacional (anteriormente Ejército Popular Sandinista), presencia que, debido al anterior conflicto, se observa hostil por buena parte de la población campesina. Así, las únicas instituciones respetadas por los pobladores de dicha zona fueron la Iglesia católica, representada por los párrocos destinados en la zona, y, en menor medida, la CIAV-OEA.
- 30** Centro creado inmediatamente después de la derrota electoral del FSLN fruto de la “conversión” del CIERA en una ONG.
- 31** Extraído de una entrevista realizada a Carlos García, presidente de la Fundación de Ex combatientes de Guerra, donde se agrupan ex miembros del EPS, el MINT y la RN.
- 32** Extraído de una entrevista al coordinador político del FSLN en Juigalpa.
- 33** Extraído de una entrevista al director de la UNAG, Daniel Núñez, en *Barricada*, 30-7-90.
- 34** Extraído de una entrevista al ex dirigente contra *Franklin*, en *Barricada*, 1991/334.
- 35** Testimonio obtenido en el trabajo de campo de un miembro de una ex CAD ubicada en una comarca oriental de Condega donde, más allá del río –que dividía la zona seca de la húmeda– era territorio de la Contra.